



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SONORA
SALA SUPERIOR

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SONORA.**

**PLENO JURISDICCIONAL DE LA SALA
SUPERIOR.**

JUICIO DEL SERVICIO CIVIL.

EXP. 98/2020.

ACTOR: -----.

**AUTORIDADES DEMANDADAS:
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE
SONORA Y SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA DEL ESTADO DE SONORA.**

**MAGISTRADO: DR. DANIEL RODARTE
RAMÍREZ.**

RESOLUCIÓN CUMPLIMENTADORA | Hermosillo, Sonora, a cinco de
abril de dos mil veintitrés.

VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número
98/2020, relativo al Juicio del Servicio Civil promovido por la **C. -----**
----- en contra de **SERVICIOS EDUCATIVOS DEL
ESTADO DE SONORA**, y la **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA DEL ESTADO DE SONORA**, reclamando de dichas
autoridades, el reconocimiento de antigüedad y el pago de prima de
antigüedad; las constancias que integran el expediente en que se actúa,
todo lo que fue necesario ver, y:

R E S U L T A N D O:

1.- El día cinco de diciembre de dos mil diecinueve, el **C. -----**
-----, demandando de los **SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE SONORA** y de la **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA DEL ESTADO DE SONORA**, el reconocimiento de su
antigüedad de treinta y un años (31) años de servicio y el pago de la
prima de antigüedad.

La demanda inicial, fue interpuesta en la fecha precisada ante la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, quien por

auto de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, se DECLARÓ INCOMPETENTE, para conocer de la presente controversia, con fundamento en el artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo. Con motivo de lo anterior, ordenó girar atento oficio y remitir los autos originales, para que conozca del presente juicio al TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORA, misma que fue recibida el once de febrero de dos mil veinte.

Por auto de fecha trece de febrero de dos mil veinte, se tuvo por recibido el expediente 98/2020, turnado al Magistrado titular de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, en auto de veinticinco de febrero de dos mil veinte, se previno a la parte actora para que aclarara, corrigiera o completara su demanda, con fundamento en el artículo 114 de la Ley del Servicio Civil.

Por auto de fecha de diecinueve de abril de dos mil veintidós, se admitió la demanda en la vía y forma propuesta, ordenándose emplazar a los Servicios Educativos del Estado de Sonora y a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, demandado.

2.- Con motivo del legal emplazamiento realizado por este Tribunal, como consta en autos; se recibió escrito de contestación de demanda recibido en la Oficialía de Partes, el día siete de junio de dos mil veintidós, compareció el Licenciado Adalberto Rodríguez Moroyoqui, en su carácter de apoderado legal de los Servicios Educativos del Estado de Sonora y de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, realizando las manifestaciones que a su derecho convengan.

Por auto de fecha catorce de junio de dos mil veintidós, se admitió la contestación de demanda formulada por los Servicios Educativos del Estado de Sonora y de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, por haber sido presentada en tiempo y forma legales.

3.- En la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el día veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se admitieron como **pruebas de la actora**, las siguientes: **1.- DOCUMENTAL**, consistente en Hoja Única de Servicios, que obra a foja once y doce del sumario.- **2.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES**, **3.- PRESUNCIONAL**

LEGAL Y HUMANA, Se admitieron como pruebas de Servicios Educativos del Estado de Sonora y de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, las siguientes: 1.- CONFESIONAL EXPRESA; 2.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; 3.- PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO; 4.- DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en Acuerdo Nacional para modernización de la educación básica publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y dos; decreto de la celebración de convenios en el marco del Acuerdo Nacional para la modernización para la educación básica Publicado en el diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1992; convenio que de conformidad con el acuerdo nacional para la modernización de la educación básica que celebraron por una parte el ejecutivo federal y por otra parte el ejecutivo estatal libre y soberano de Sonora, con la comparecencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el diario oficial el 25 de mayo de 1992, decreto que crea los SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA, publicado en el Boletín Oficial número 40 sección I de 18 de mayo de 1992 y reglamento interior de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial tomo CCVI Edición Especial de 30 de diciembre de 2020.-

Al no existir pruebas que ameritaran desahogo posterior, se pasó al período de alegatos y, ante la incomparecencia de la parte actora, se le tuvo por perdido el derecho para presentar sus alegatos de conformidad con los artículos 735 y 738 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria en la materia; por otra parte, se tuvieron por presentados los alegatos que corresponden a la parte demandada, por lo que se citó el presente asunto para oír resolución definitiva.

4.- El tres de octubre de dos mil veintidós, se dictó resolución definitiva.

5.- El veinte de enero de dos mil veintitrés, el apoderado legal de la parte actor promovió juicio de amparo directo laboral, del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito bajo el número de Amparo Directo Laboral 268/2023.

6.- El cuatro de marzo de dos mil veinticuatro, se tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria de amparo, donde se determinó que:

“ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a - - - - -
- - - - - - - - - -contra la resolución de tres de octubre de dos mil veintidós, dictada por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, en los autos del expediente número 98/2020, para los efectos precisados en el párrafo 55 (cincuenta y cinco) de esta ejecutoria.

La DECISIÓN DEL AMPARO, es la siguiente:

“55. En mérito de lo anterior, y de acuerdo con lo establecido por el artículo 77 de la Ley de Amaro, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal para efectos de que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad:

- I. Declare insubsistente el laudo de tres de octubre de dos mil veintidós, emitido en el expediente 98/2020.
- II. Emita un nuevo laudo en el que, luego de reiterar las consideraciones ajenas a la concesión prescinda de considerar fundada la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada, y con base en las pruebas ofrecidas al juicio determine la antigüedad del actor.

CONSIDERANDO:

I.- CUMPLIMIENTO: Este Tribunal acata la ejecutoria de amparo pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, en el juicio de amparo directo laboral número 268/2023.

En observancia de la ejecutoria de mérito, se deja insubsistente la resolución emitida con fecha tres de octubre dos mil veintidós, en el expediente número 98/2020.

Se dejan intocadas las consideraciones que no fueron materia de la concesión y se **prescinde de considerar fundada la excepción**

de prescripción opuesta por la parte demandada y con base en las pruebas ofrecidas al juicio se determina la antigüedad del actor.

II.- COMPETENCIA: Este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora actuando en funciones de Tribunal de Conciliación y Arbitraje, es competente para conocer y resolver la presente controversia, con fundamento en el artículo 112, fracción I, y artículo Sexto Transitorio de la Ley No. 40 del Servicio Civil del Estado de Sonora; y en los artículos 1, 2 y 13, fracción IX, y artículo Sexto Transitorio de la Ley No. 185 de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora, que abrogó la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora.

Ahora bien, el artículo 1, del Decreto que Crea a los Servicios Educativos del Estado de Sonora, como entidad demandada en el presente asunto dispone:

“ARTÍCULO 1.- Se crean los Servicios Educativos del Estado de Sonora, como un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio.”

Al margen del análisis de las características del indicado organismo descentralizado, el referido decreto, en su artículo 14, dispone:

“ARTÍCULO 14.- En materia de relaciones laborales y de seguridad social, los Servicios Educativos del Estado de Sonora, aplicarán la Ley del Servicio Civil para el Estado y lo que establecen los Convenios celebrados entre el Gobierno del Estado, Gobierno Federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el 18 de mayo de 1992.”

De la lectura del precepto transcrito se advierte, que las relaciones laborales entre Servicios Educativos del Estado de Sonora, y sus trabajadores se rigen por las disposiciones de la Ley del Servicio Civil de la entidad; siendo que para efectos del sentido de la presente resolución, ésta última dispone lo siguiente en sus artículos 1, 2, 112 y sexto transitorio:

“ARTICULO 1º.- Esta ley es de observancia general para los trabajadores del servicio civil y para los titulares de todas las entidades y dependencias públicas en que prestan sus servicios.

ARTICULO 2º.- Servicio civil es el trabajo que se desempeña en favor del Estado, de los municipios, de las instituciones que a continuación se enumeran: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; así como de los otros organismos descentralizados, cuando el ordenamiento jurídico de su creación así lo disponga.

ARTÍCULO 112.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje será competente para:

- I. *Conocer de los conflictos individuales que se susciten entre los titulares de una entidad pública y sus trabajadores;*

(...)

TRANSITORIOS:

(...)

ARTICULO SEXTO.- *En tanto se instala y constituye el Tribunal de Conciliación y Arbitraje conocerá de los asuntos previstos por el artículo 112 de la presente ley el Tribunal Unitario de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora.*

De conformidad con los dos últimos preceptos transcritos, de actualizarse la relación de trabajo entre Servicios Educativos del Estado de Sonora con la actora, correspondería al Tribunal de Conciliación y Arbitraje el conocimiento de los conflictos que se susciten entre los titulares de una entidad pública y sus trabajadores, pero en tanto se instale y constituya éste conocerá este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora (antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora).

Al regularse las relaciones de Servicios Educativos del Estado de Sonora y sus trabajadores en la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, por disposición expresa del artículo 14 de la Ley que crea los Servicios Educativos del Estado de Sonora, y de acuerdo con la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, los conflictos entre las entidades públicas, los organismos descentralizados cuando el ordenamiento jurídico de su creación así lo disponga como es el caso y sus trabajadores, serán competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, en tanto se instala y constituye el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6490/2015, en la ejecutoria de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2ª./J. 180/2012 (10ª.), acorde a la cual, las controversias laborales suscitadas entre los organismos públicos descentralizados y sus trabajadores debían resolverse por la Juntas de Conciliación y Arbitraje y todos aquellos criterios donde se hubiere sostenido una postura similar, en virtud de que el Alto Tribunal realizó una nueva reflexión sobre el tema y decretó que las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones

laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con el apartado A o el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, inclusive, de manera mixta, sin obligación a sujetarse a alguno de ellos en especial.

Del citado criterio derivó la jurisprudencia 2ª./J. 130/2016 (10ª.) publicada en la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 36, noviembre de 2016, tomo II, materias constitucional y laboral, página 1006, registro 2012980, de aplicación obligatoria a partir del catorce de noviembre de dos mil dieciséis, misma que se transcribe a continuación:

“ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)]. La voluntad del Constituyente plasmada en el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, consiste en otorgar flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los Estados y Municipios, aunado a que, de su interpretación gramatical, se observa que se determinó que las relaciones de trabajo entre los "Estados y sus trabajadores" se rigieran por las leyes que expidan las Legislaturas Locales, en el que se utiliza el concepto "Estado" como sinónimo de Estado federado como orden jurídico, lo que incluye a los poderes locales, los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública local, así como a los organismos constitucionales autónomos de la entidad. Con base en lo anterior, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial.

Asimismo, es aplicable por analogía la diversa jurisprudencia 2a./J. 131/2016 (10a.), publicada en la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 36, noviembre de 2016, tomo II, materias constitucional, página 963, registro 2012979, que a la letra dice:

“ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. EL LEGISLADOR SECUNDARIO TIENE FACULTADES PARA SUJETAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES A LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y JUDICIAL, DE LOS AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE ESA ENTIDAD. Conforme a lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a que la voluntad del Constituyente plasmada en el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en otorgar flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los Estados y

Municipios, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial. Por tanto, si en uso de sus facultades, el legislador secundario sujetó las relaciones de los organismos públicos descentralizados del Estado de Quintana Roo y sus trabajadores a lo previsto en el apartado B del precepto 123 constitucional y, en consecuencia, a la legislación local -Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados de esa entidad-, ello no transgrede el texto constitucional, ya que el legislador local que expidió este último ordenamiento está facultado para hacerlo.”

II.- Oportunidad de la demanda: El plazo de presentación de la demanda resultó oportuna, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, que establece que, las acciones que nazcan de la ley, del nombramiento y de los acuerdos que fijen las condiciones generales de trabajo, prescriben en un año, con las excepciones contenidas en el artículo 102, del mismo ordenamiento. Al efecto, los demandantes reclaman en el pago de diversas prestaciones las cuales serán analizadas al entrar al fondo de cada una de ellas, toda vez que la patronal demandada opuso excepción de prescripción respecto de algunas de las acciones ejercitadas, por lo tanto, para no prejuzgar en este apartado, se analizarán cada una de las prestaciones reclamadas a la luz de las excepciones de prescripción opuestas al llevar a cabo el análisis individual de cada una de las prestaciones que se reclaman en el presente juicio.

III.- PROCEDENCIA DEL JUICIO: Resulta ser correcta y procedente la elegida por la parte actora del presente juicio, en los términos de los artículos 113, 114 y demás aplicables de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora; así como el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora, **y el ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO del Decreto 130 que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sonora**, el cual faculta a este Tribunal para el trámite de este juicio en la vía elegida por la parte actora.

IV.- PERSONALIDAD: En el caso de la C. -----
---, compareció por su propio derecho, como persona física, mayor de edad, en pleno goce de sus facultades mentales, reclamando las prestaciones a las que se contrae su escrito de demanda en los términos previstos en el artículo 120 de la Ley del Servicio Civil.

LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA y la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, comparecieron por conducto del Licenciado -----
-----, apoderado legal de los Servicios Educativos del Estado de Sonora y la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, según lo acredita con copias certificadas de las Escrituras Públicas de número 792 (SETECIENTOS NOVENTA Y DOS) de doce de octubre de dos mil veintiuno; y 839 (OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE), de veintisiete de noviembre de dos mil veintiuno, pasadas ante la fe de la Notario Público número 106, Licenciada Elizabeth González Madrid.

Además de lo anterior, en el presente procedimiento no se advierte que haya sido objetada por alguno de los contendientes la personalidad con que comparecieron al presente juicio; y no se demostró en el presente sumario lo contrario; atento a lo anterior, se justifica que quedó debidamente acreditada la personalidad de cada uno de los contendientes en la presente controversia con los documentos que se acompañaron a los escritos inicial de demanda y de contestación con los que justifican la personería con la que comparecen.

V.- LEGITIMACIÓN: En el caso de la parte actora, la legitimación se acredita con las facultades y derechos que al efecto prevé la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6; y en el caso de las autoridades demandadas SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA y SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, se legitima por ser de las entidades públicas, comprendidas en los numerales 1 y 2; y que son sujetos de derechos y obligaciones como entes en que prestan sus servicios los trabajadores del servicio civil según se establece en el artículo 3 y 5 de la ley burocrática estadual; corroborándose lo anterior,

con las defensas y excepciones que opuso y que estimó aplicables al presente juicio en los términos señalados en el artículo 689 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil.

VI.- VERIFICACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO: Por ser de orden público se estudia el correcto emplazamiento. En el presente caso los demandados fueron emplazados por la actuario adscrita a este Tribunal cubriéndose las exigencias que la ley prevé, lo cual se corrobora con los escritos de contestación de la demanda, estableciéndose la relación jurídica procesal.

VII.- OPORTUNIDADES PROBATORIAS: Todas las partes contendientes en el presente juicio gozaron de dicha prerrogativa en igualdad de circunstancias y oportunidades, pues abierta la dilación probatoria que al efecto se concedió, los contendientes ofrecieron los medios de convicción que estimaron convenientes para acreditar sus respectivas pretensiones de hecho y de derecho, así como las defensas y excepciones que estimaron aplicables al caso. En la especie, no se opusieron ni se advierten actualizadas las excepciones de litispendencia, caducidad de la acción, o la cosa juzgada; por lo que satisfechos todos y cada uno de los presupuestos procesales exigidos por la Ley, resulta en que el presente juicio tenga existencia jurídica y validez formal.

VIII.- ESTUDIO: EN CUMPLIMIENTO A EJECUTORIA DE AMPARO DIRECTO LABORAL 268/2023, que emite el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, se procede a resolver en los siguientes términos:

Analizados que fueron todos y cada uno de los presupuestos procesales en los considerandos que anteceden y al resultar en la existencia jurídica y validez formal del juicio se procede a entrar al estudio del fondo del asunto.

La actora reclama el reconocimiento de que cuenta con una antigüedad de TREINTA Y UN (31) años de servicios y el pago por la cantidad de **\$65,739.84** (Son: Sesenta y Cinco Mil Setecientos Treinta y Nueve Pesos 84/100 Moneda Nacional), por concepto de la prima de

antigüedad prevista y regulada por el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria en la materia.

Señala como hechos que el **UNO DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO**, comenzó a laborar para los demandados, realizando funciones de Director y Maestro de Primaria; que su última adscripción fue en Nogales, Sonora, donde laboró hasta el **TREINTA DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS**, fecha en la que renunció de manera voluntaria a fin de acceder a su jubilación, sin embargo y no obstante de haber requerido en reiteradas ocasiones a la patronal el pago de la prestación demandada, este se ha negado a realizarlo.

Los demandados en la contestación manifestaron que el punto primero de hechos es cierto, respecto a que la actora con fecha **UNO DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO**, inició a laborar realizando funciones de docente; que el segundo hecho de la demanda es cierto, respecto a que la actora renunció de manera voluntaria el día **TREINTA DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS**, a fin de acceder a su jubilación.

Confesionales expresas y espontáneas a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 123 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, 794 y 841 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria en la materia del Servicio Civil, por disposición del artículo 10 de dicho ordenamiento jurídico.

De las referidas confesionales, se desprende que la actora laboró para los demandados, **TREINTA Y UN (31) AÑOS, DOS (2) MESES, VEINTINUEVE (29) DÍAS**, lo cual se corrobora con la “hoja única de servicios” exhibida por la actora, visible a foja cinco del sumario de la que se advierte como fecha de ingreso el **01/09/1965** y como fecha de baja **30/11/1996**, documental a la que se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 123 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, 795 y 841 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria en la materia del Servicio Civil.

En consecuencia, este Tribunal hace suyos los razonamientos de la ejecutoria de amparo que se cumple en el sentido de que en la

jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J 30/2001, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que en el momento en que el trabajador ejerce su derecho de reconocimiento de antigüedad, se presentan dos situaciones:

a) Que se determine su antigüedad genérica por conducto de la comisión integrada con representantes de los trabajadores y del patrón instaurada al efecto, que es un órgano con facultades para determinar la antigüedad de los empleados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley Federal del Trabajo, cuyas resoluciones pueden recurrirse ante la autoridad judicial; y,

b) Que no se determine su antigüedad genérica por conducto de dicha comisión mixta, sino mediante una resolución unilateral de la empresa.

Invocando que en el supuesto identificado con el inciso "a", el plazo de prescripción de la acción para impugnar jurisdiccionalmente el reconocimiento de antigüedad empieza a correr a partir de que el trabajador se entera de la antigüedad que le fue reconocida por el organismo facultado legalmente, porque es hasta ese momento que está en posibilidad de recurrirla judicialmente.

En lo que se refiere al inciso "b" no existe una fecha cierta y determinada en la que las partes hubieren convenido lo relativo a la antigüedad de los trabajadores, de la que pueda partirse para computar el término de un año a efecto de que opera la excepción de prescripción de la acción para inconformarse con tal reconocimiento unilateral por parte de la patronal, eso es, no se está en el caso de que la empresa demandada hubiera reconocido la antigüedad genérica o de empresa a los trabajadores y que éstos es la hubieran aceptado, conforme a los lineamientos que prevé el numeral 158 de la ley de la materia.

Que claramente se advierte que para tener una fecha cierta para iniciar el cómputo del plazo de la prescripción es necesario que la dependencia previamente haya determinado la antigüedad del trabajador siguiendo los lineamientos establecidos en el artículo 158 de la Ley Federal del Trabajo y que le haya comunicado dicha determinación a éste, **lo que no ocurre en la especie**, pues la

demandada no aportó pruebas que demuestren que reconocieron previamente la antigüedad del trabajador siguiente el procedimiento del multicitado numeral 158, sin que la fecha de expedición de la “hoja única de servicios” que emitió la demandada, pueda considerarse como data cierta para computar el término prescriptivo, pues es un documento unilateral, que puede contener omisiones y que no demuestra que el trabajador haya aceptado la antigüedad consignada en el mismo pues no aparece su firma de enterado plasmada en el documento.

De ahí que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se reconoce que ----- cuenta con una antigüedad de **TREINTA Y UN (31) AÑOS, DOS (2) MESES, VEINTINUEVE (29) DÍAS**, tiempo que se da entre el **uno de septiembre de mil novecientos sesenta y cinco** [fecha de inicio de la relación laboral burocrática] al **treinta de noviembre de mil novecientos noventa y seis** [fecha de la renuncia].

Luego entonces, el único hecho controvertido del presente juicio, es el pago de la Prima de Antigüedad, y en atención a la ejecutoria que se cumple se reitera que la misma es absolutoria.

Lo anterior es así, porque en el presente juicio no resulta aplicable supletoriamente la Ley Federal del Trabajo, ya que dicha prestación no fue prevista ni por la Ley Federal Burocrática que inicialmente rigió la relación de trabajo, ni por la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora, ordenamientos jurídicos que resultan aplicables a la relación laboral que sostenían como trabajadores de la Secretaría de Educación Pública (federal) y posteriormente con los Servicios Educativos del Estado de Sonora, con motivo del Acuerdo de Modernización de la Educación Básica, celebrado por el Gobierno Federal y las Entidades Federativas. Lo anterior, conduce a concluir con meridiana claridad que a los trabajadores al servicio del Estado (local o federal), no les corresponde la prima de antigüedad, toda vez que ninguna de las leyes burocráticas aludidas, contempla dicha figura, por lo que no existe fundamento legal alguno, en que pueda apoyarse el hecho de que deba aplicarse en forma supletoria el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, dado que no se está ante un caso de omisión o laguna, pues la prestación

analizada no fue abordada por ninguna de las legislaciones citadas, puesto que conforme al artículo 10 de la Ley del Servicio Civil, en la interpretación de dicha ley se tomarán en consideración los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución General de la República y de la Ley Federal del Trabajo, que para ese efecto será aplicable supletoriamente, así como la jurisprudencia, la costumbre, el uso y la equidad.

El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su apartado A, el régimen jurídico a que están sujetas las relaciones laborales de los patrones con los obreros, jornaleros, domésticos entre otros; en concordancia con dicho apartado, la Ley Federal del Trabajo prevé entre otros beneficios para los trabajadores, con cargo al patrón la PRIMA DE ANTIGÜEDAD (artículo 162). Por otro lado, el apartado B del precepto constitucional indicado, instituye los principios fundamentales que rigen las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal (ciudad de México), por una parte, y sus servidores por la otra; este apartado y las leyes que lo reglamentan, aunque no establecen la prima de antigüedad, sí instauran otros beneficios para los servidores públicos con motivo de su antigüedad, con cargo principalmente al presupuesto de egresos correspondiente.

Los dos sectores laborales mencionados y regulados por el artículo 123 constitucional, están claramente catalogados en cuanto a su régimen, lo que no sucede con los trabajadores al servicio de los organismos descentralizados de orden federal o estatal, respecto de los cuales no existe un sistema ordenado, pues en unos casos se gobiernan por el referido apartado A y otros por el B; tal incertidumbre sin embargo, no debe llevar a aceptar que un trabajador de un organismo descentralizado, como lo es los Servicios Educativos del Estado de Sonora, tiene derecho a los beneficios por antigüedad que se establecen en ambos apartados, porque tal extremo, no lo establece ninguna norma constitucional ni legal, porque no puede producirse el efecto de modificar las relaciones jurídicas entre dicho organismo y sus trabajadores durante el tiempo que estuvo vigente la relación de trabajo,

que siempre se rigió por el apartado B, lo que se obtiene de la confesión expresa y espontánea realizada por la actora del presente juicio, pues manifiesta que relación de trabajo fue el Organismo Descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora, Servicios Educativos del Estado de Sonora, por lo que no debe perderse de vista que sus sueldos y demás erogaciones siempre fueron con cargo al presupuesto de egresos correspondiente y que la relación de trabajo durante su vigencia, se rigió por el apartado B del artículo 123 constitucional. La confesión expresa y espontánea en este apartado destacada, gozan de eficacia plena probatoria de conformidad con el artículo 794 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil, para establecer, que la relación de trabajo que sostuvo el accionante con Los Servicios Educativos del Estado de Sonora, se rigió por el apartado B, del artículo 123 constitucional, puesto que recibió los quinquenios correspondientes a sus años de servicios, además, todos y cada uno de ellos fueron pensionados por jubilación por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que resulta de observancia y aplicación para las Dependencias, Entidades, Trabajadores al servicio civil y Pensionados, entre otros, para los servidores públicos de la administración pública federal; dependencias, entidades y organismos enumerados en las fracciones que integran el artículo 1º de dicho ordenamiento jurídico.

Lo anteriormente precisado, encuentra sustento en lo establecido en el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual se abandona el criterio sostenido con antelación a la emisión del que se transcribe:

Época: Décima Época
Registro: 2012980
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II
Materia(s): Constitucional, Laboral
Tesis: 2a. /J. 130/2016 (10a.)
Página: 1006

“ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL

LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a. /J. 180/2012 (10a.) (*)].

La voluntad del Constituyente plasmada en el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, consiste en otorgar flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los Estados y Municipios, aunado a que, de su interpretación gramatical, se observa que se determinó que las relaciones de trabajo entre los "Estados y sus trabajadores" se rigieran por las leyes que expidan las Legislaturas Locales, en el que se utiliza el concepto "Estado" como sinónimo de Estado federado como orden jurídico, lo que incluye a los poderes locales, los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública local, así como a los organismos constitucionales autónomos de la entidad. Con base en lo anterior, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial.

Amparo directo en revisión 6490/2015. Ovidio Rodríguez García. 4 de mayo de 2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Jocelyn Montserrat Mendizábal Ferreyro.

Amparo directo en revisión 671/2016. José Espinosa Medina. 13 de julio de 2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad José Fernando Franco González Salas. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos.

Amparo directo en revisión 1366/2016. Susana Leticia Fuentes Sosa. 24 de agosto de 2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Francisco Manuel Rubín de Celis Garza.

Amparo directo en revisión 1913/2016. Manuel Arturo Acevedo Godoy. 24 de agosto de 2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Francisco Manuel Rubín de Celis Garza.

Amparo directo en revisión 1356/2016. Ligia Mirbella Arceo y Avilés. 21 de septiembre de 2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Ron Snipeliski Nischli.

Tesis de jurisprudencia 130/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis.

Nota: (*) La tesis de jurisprudencia 2a./J. 180/2012 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 734, con el rubro: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. LAS RELACIONES LABORALES CON SUS TRABAJADORES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, POR LO QUE LA COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS RESPECTIVOS CORRESPONDE A LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE."

Esta tesis se publicó el viernes 11 de noviembre de 2016 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Se sigue entonces, que en el ámbito jurídico de los organismos públicos descentralizados de carácter estatal, aunque hayan sido creados por los gobiernos de las entidades federativas, con motivo de la descentralización de los Servicios de Educación Básica, lo que aconteció en cumplimiento al Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica, signado por el Ejecutivo Federal y los Gobernadores de las entidades federativas y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de mayo de 1992, se obtiene pues que sí originalmente la relación de trabajo se regía por la Ley Federal Burocrática y con motivo del Acuerdo Nacional de Modernización de la Educación, de cuyo contenido también se obtiene que aplica la Ley del Servicio Civil, pues también resulta que la relación de trabajo se rige conforme a las reglas del apartado B del artículo 123 constitucional, pues conforme al artículo 116 fracción VI, de la Constitución General de la República, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores y por ello la prestación

principal reclamada consistente en prima de antigüedad prevista y regulada en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, resulta improcedente, pues no se encuentra prevista en ninguno de los ordenamientos jurídicos burocráticos ya aludidos, sin que pueda reclamarse en forma supletoria, puesto que la supletoriedad no tiene el alcance de introducir figuras jurídicas no previstas en el ordenamiento jurídico a suplir conforme al criterio de jurisprudencia que se reproduce a continuación:

Época: Décima Época

Registro: 2003161

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2

Materia(s): Constitucional

Tesis: 2a./J. 34/2013 (10a.)

Página: 1065

“SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE.

La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate.”.

Contradicción de tesis 389/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Administrativa del Segundo Circuito y Segundo en la misma materia del Séptimo Circuito. 20 de enero de 2010. Mayoría de cuatro votos; votó con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Ileana Moreno Ramírez.

Contradicción de tesis 406/2010. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. 13 de abril de 2011. Cinco

votos; votó con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Francisco Gorka Migoni Goslinga.

Amparo en revisión 712/2011. Consultores en Servicios Jurídicos Fiscales, S.A. de C.V. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos; votó con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Jonathan Bass Herrera.

Contradicción de tesis 437/2012. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito. 14 de noviembre de 2012. Cinco votos; votó con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo.

Amparo directo 40/2012. Ejido Nueva Libertad, Municipio La Concordia, Chiapas. 21 de noviembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos; votaron con salvedades José Fernando Franco González Salas y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Ileana Moreno Ramírez.

Tesis de jurisprudencia 34/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del trece de febrero de dos mil trece.

Conforme al criterio transcrito, la aplicación supletoria de la ley, en el caso de la Ley Federal del Trabajo procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y es necesario que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente; la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar controversias o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y por último, que las normas aplicable supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate.

En el presente juicio; la prestación que analiza resulta improcedente, porque no fue intención del legislador incluir como

prestación la prima de antigüedad prevista y regulada en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, la cual se contempla para los trabajadores que se rigen por el apartado A del artículo 123 constitucional. Esto es así, porque a los trabajadores del servicio civil, el legislador previó como prestación por concepto de antigüedad el quinquenio, y aun cuando son prestaciones de distinta naturaleza, pues mientras una se actualiza cuando la relación de trabajo termina; mientras la otra se da, cada que se cumplen cinco años de servicio, por lo que sería jurídicamente injusto incluir a los trabajadores burocráticos una prestación que el constituyente y legislador ordinario reservó para los trabajadores cuya relación, se rige por el apartado A del artículo 123 constitucional. Para mayor ilustración, se transcribe el criterio de jurisprudencia del tenor siguiente:

Época: Novena Época
Registro: 192586
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XI, Enero de 2000
Materia(s): Laboral
Tesis: I.6o.T. J/25
Página: 945

“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. QUINQUENIO Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD. NATURALEZA.

Las prestaciones relativas a quinquenio y prima de antigüedad, son de naturaleza diversa, toda vez que son prestaciones que se encuentran reguladas por legislaciones diferentes, pues el artículo 34 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, fracción II, establece: "Por cada cinco años de servicios efectivos prestados hasta llegar a veinticinco, los trabajadores tendrán derecho al pago de una prima como complemento del salario. En los presupuestos de egresos correspondientes, se fijará oportunamente el monto o proporción de dicha prima.". Y el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, dispone: "Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad, de conformidad con las normas siguientes: I. La prima de antigüedad consistirá en el importe de doce días de salario, por cada año de servicios; ...". De lo cual se aprecia que aun cuando estas prestaciones se basan en la antigüedad de los trabajadores, son de naturaleza diferente, ya que el quinquenio es un complemento del salario y la prima de antigüedad no; el monto del quinquenio se establece en el presupuesto de egresos y el monto de la prima de antigüedad, está señalado en la Ley Federal del Trabajo en forma mínima y puede ser aumentado convencionalmente por las partes; el monto del quinquenio no puede rebasar lo autorizado en el presupuesto de egresos y la prima de antigüedad puede rebasar los límites legales; y, por último, el

quinquenio se paga durante el transcurso de la relación laboral y la prima de antigüedad se paga al término de la relación laboral.”.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 9456/96. Servicio Postal Mexicano. 26 de septiembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Secretaria: María Teresa Negrete Pantoja.

Amparo directo 7846/97. Yolanda Ramírez Figueroa. 19 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Patiño Pérez. Secretario: José Luis Martínez Luis.

Amparo directo 7006/98. Servicio Postal Mexicano. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Arturo Baizábal Maldonado. Secretaria: Lourdes Patricia Muñoz Illescas.

Amparo directo 746/99. Servicio Postal Mexicano. 19 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Lourdes Patricia Muñoz Illescas.

Amparo directo 9996/99. Natalia Gaona García y otros. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Lourdes Patricia Muñoz Illescas.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, agosto de 1997, página 830, tesis I.1o.T.83 L, de rubro: "TRABAJADORES DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO. PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y PRIMA QUINQUENAL. DIFERENCIAS.”.

Así pues, conforme a lo evidenciado, aun cuando las prestaciones sean de naturaleza diferente, no debe de perderse de vista que son prestaciones que el legislador ordinario estableció en las leyes reglamentarias de los apartados A y B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, la prima de antigüedad en la Ley Federal del Trabajo, y el Quinquenio en las Leyes Burocráticas reglamentarias del apartado B del artículo constitucional aludido, o bien en las condiciones generales de trabajo del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, como ocurre en la especie, previsto y regulado en el artículo 96 de dicha normativa. Lo anterior, se robustece con el contenido del criterio jurisprudencial siguiente:

Época: Décima Época

Registro: 2011015

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III

Materia(s): Laboral

Tesis: III.1o.T. J/1 (10a.)

Página: 2011

“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO. PRIMA DE ANTIGÜEDAD. RECLAMACIÓN IMPROCEDENTE.

Es correcta la absolución decretada en cuanto a la prima de antigüedad, en virtud de que esa prestación no está prevista en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.”.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 34/87. María Prieto Cárdenas. 23 de septiembre de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: Andrés Cruz Martínez. Secretario: Roberto Ruiz Martínez.

Amparo directo 304/2006. Jerónimo López Gómez. 22 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Andrés Cruz Martínez. Secretario: Miguel Ángel Regalado Zamora.

Amparo directo 559/2006. Gabriel Alfaro Arana. 8 de agosto de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Andrés Cruz Martínez. Secretario: Miguel Ángel Regalado Zamora.

Amparo directo 1552/2011. Aracely Pintor Quiroz. 2 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Rodríguez Martínez. Secretario: Martín Villegas Gutiérrez.

Amparo directo 851/2014. 22 de julio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Bañales Sánchez. Secretario: Martín Villegas Gutiérrez.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de febrero de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Como se evidenció de lo hasta aquí precisado, la reclamación consistente en prima de antigüedad ejercitada por la actora en este juicio, como ya se determinó deviene improcedente, lo que se robustece también con el criterio jurisprudencial siguiente:

Época: Décima Época

Registro: 2014530

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV

Materia(s): Laboral

“PRIMA DE ANTIGÜEDAD. AL NO ESTAR CONTEMPLADA EN LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DICHO BENEFICIO NO LE CORRESPONDE A ESTE TIPO DE TRABAJADORES, SIN QUE PROCEDA LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL NO ESTAR FRENTE A UN CASO DE OMISIÓN O LAGUNA.

A los trabajadores al servicio del Estado no les corresponde la prima de antigüedad, toda vez que la ley burocrática no contempla dicha figura; en consecuencia, no existe fundamento legal en que pueda apoyarse el hecho que deba aplicarse en su favor el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, dado que no se está frente a un caso de omisión o laguna, único en que el artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado autoriza la supletoriedad de la codificación laboral común.”.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 1038/2011. Rosa María Guerrero Zárate. 10 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Sandra Iliana Reyes Carmona.

Amparo directo 243/2012. María de la Luz Figueroa Cedillo. 24 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Sandra Iliana Reyes Carmona.

Amparo directo 33/2013. Bertha Martínez Soto. 20 de febrero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez. Secretario: Miguel Ángel Burguete García.

Amparo directo 958/2016. Rosa Imelda Orozco Díaz de León. 8 de diciembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Virginia Fabiola Rosales Gómez.

Amparo directo 187/2017. 20 de abril de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Herlinda Flores Irene. Secretaria: Norma Nelia Figueroa Salmorán.

Esta tesis se publicó el viernes 16 de junio de 2017 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de junio de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Además de lo anterior, así se obtiene del decreto de creación de Los Servicios Educativos del Estado de Sonora, que en sus artículos 1º y 14 establece, que se constituye un organismo público descentralizado

con personalidad y patrimonio jurídicos propios; y que las relaciones laborales y de seguridad social se aplicará la Ley del Servicio Civil, que resulta ser la reglamentaria del apartado B, del artículo 123 Constitucional. Para mayor ilustración, se transcriben los artículos aquí aludidos.

“ARTÍCULO 1.- Se crean los Servicios Educativos del Estado de Sonora, como un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio”.

“ARTÍCULO 14.- En materia de relaciones laborales y de seguridad social, los Servicios Educativos del Estado de Sonora, aplicarán la Ley del Servicio Civil para el Estado y lo que establecen los Convenios celebrados entre Gobierno del Estado, Gobierno Federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el 18 de mayo de 1992”.

Por lo todo lo vertido con anterioridad, se reitera pues la improcedencia del pago de la Prima de Antigüedad demandada por la actora de este juicio, pues como se evidenció, la relación de trabajo se rigió por el apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por todo lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO: Se **CUMPLIMENTA** la ejecutoria de amparo directo laboral emitida con fecha quince de febrero de dos mil veinticuatro, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, dentro del juicio de **amparo directo laboral número 268/2023**.

SEGUNDO: Se deja sin efectos la resolución de fecha **tres de octubre de dos mil veintidós**.

TERCERO: Este Tribunal es **COMPETENTE** para conocer y decidir sobre los juicios del Servicio Civil, en funciones de Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siendo la vía elegida por la actora para su trámite, la correcta y procedente.

CUARTRO: Han procedido parcialmente las acciones intentadas por -----, en contra de los **SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA** y de la **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA**.

QUINTO: Se condena a los **SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA** y a la **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y**

CULTURA DEL ESTADO DE SONORA a reconocer que el actor - - - -
----- tiene una antigüedad de **31 AÑOS, 2 MESES, 29**
DÍAS a su servicio; por las razones expuestas en el último considerando
de esta resolución.

SEXTO: Se absuelve a los **SERVICIOS EDUCATIVOS DEL**
ESTADO DE SONORA y a la **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y**
CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, de pagar al actor - - - - -
-----, la cantidad de **\$65,739.84** (Son: Sesenta y Cinco Mil
Setecientos Treinta y Nueve Pesos 84/100 Moneda Nacional), por
concepto de PRIMA DE ANTIGÜEDAD, establecida en el artículo 162
de la Ley Federal del Trabajo, por los años de servicios prestados, por
las consideraciones de hecho y de derecho establecidos en el último
Considerando de esta resolución.

SÉPTIMO: NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE la presente para
todos los efectos legales, de conformidad con el artículo 125 de la Ley
del Servicio Civil para el Estado de Sonora y en su oportunidad,
archívese este asunto como total y definitivamente concluido.

A S Í lo resolvieron y firmaron por unanimidad de votos de los
Magistrados de Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Sonora, José Santiago Encinas Velarde, (Presidente), Renato Alberto
Girón Loya, Daniel Rodarte Ramírez, Blanca Sobeida Viera Barajas y
Guadalupe María Mendivil Corral, siendo ponente el tercero en orden
de los nombrados, quienes firman con el Secretario General de
Acuerdos, Luis Arsenio Duarte Salido, que autoriza y da fe.- DOY FE.-

MTRO. JOSÉ SANTIAGO ENCINAS VELARDE.
MAGISTRADO PRESIDENTE.

MTRO. RENATO ALBERTO GIRÓN LOYA.
MAGISTRADO SEGUNDO INSTRUCTOR.

DR. DANIEL RODARTE RAMÍREZ.
MAGISTRADO TERCERO INSTRUCTOR.

MTRA. BLANCA SOBEIDA VIERA BARAJAS
MAGISTRADA CUARTA INSTRUCTORA.

LIC. GUADALUPE MARÍA MENDÍVIL CORRAL.
MAGISTRADA QUINTA INSTRUCTORA.

MTRO. LUIS ARSENIÓ DUARTE SALIDO.
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.

En once de abril de dos mil veinticuatro, se publicó en Lista de Acuerdos y Proyectos, la resolución que antecede.- CONSTE.-

MESR